



Desarrollo social sustentable

JOSÉ VIRTUOSO

Lo más preocupante son las señales emitidas en el sentido de que el Estado no es sólo rector del desarrollo, sino su exclusivo diseñador y ejecutor, especialmente en las áreas de política social, educación, salud, etc.

La principal dolencia de nuestras sociedades es el deterioro de las condiciones de vida de las mayorías. Nuestro desarrollo debe asegurar la inclusión de esas mayorías y de sus futuras generaciones al bienestar mínimo indispensable, como criterio de validez empírico de ese desarrollo; pero también, como condición de posibilidad para que ese desarrollo pueda soportarse sobre cimientos verdaderos. Es por ello que hablamos de desarrollo social sustentable, porque la variable social es la que condiciona de manera estable todo el proceso de avance hacia niveles superiores de condiciones de vida para el conjunto de la sociedad.

Por su parte, el desarrollo social sustentable sólo es completo en la medida en que es capaz de involucrar a toda la sociedad en su diseño, ejecución, control y evaluación. El desarrollo social sustentable es doblemente social y sustentable en la medida en que los logros obtenidos no sólo dejan un saldo de progreso material, que se expresa en un crecimiento de los indicadores de las condiciones de vida de la población, sino que además constituye el sujeto y el tejido social que asume el progreso bajo el modo de vida democrático.

Estas dos afirmaciones tienen como base un proceso irreversible en la sociedad contemporánea: "lo público" ha dejado de ser un coto de actuación exclusiva de los Estados nacionales, para empezar a ser pensado y asumido desde la corresponsabilidad entre ciudadanía y burocracias políticas. La maduración efectiva de las democracias y la conciencia cada vez más creciente de las organizaciones de la sociedad civil, han hecho posible la transición del estatismo hacia la interdependencia de los actores sociales. En América Latina concurren como antecedentes inmediatos de este proceso: las crisis de los populismos, la agudización del empobrecimiento generalizado de nuestras sociedades y el fortalecimiento en ellas de la conciencia ciudadana. Las crisis de los populismos nos han enseñado que el crecimiento exagerado del Estado y su intervención generalizada como motor del desarrollo social y de la legitimidad de los actores políticos no hace viable nuestra sociedades. Por su parte, el empobrecimiento masivo ha obligado a la sociedad, en su conjunto, a participar activamente en la búsqueda de alternativas de bienestar social. Y todo lo anterior ha servido, también, para profundizar la conciencia ciudadana en el fortalecimiento de las democracias a través de la participación constante en la vida en común de la sociedad.

Desde estas dinámicas, se afianza la conciencia generalizada de lo público, conceptualizado como la construcción constante del hogar común, a través del esfuerzo mancomunado de todos los actores sociales, que desde su especificidad concurren para poner en común sus haberes. Esa conciencia es la que permite visualizar el tránsito real de nuestras sociedades hacia el desarrollo social sustentable. Esto es, la posibilidad de diseñar una sociedad que asegure un proceso de desarrollo perma-

nente en el tiempo, sin arriesgar las posibilidades de las generaciones futuras, sobre la capacidad política e institucional de esa sociedad para integrarse como cuerpo corresponsable.

Las ONG intermediarias de desarrollo

Las organizaciones no gubernamentales intermediarias de desarrollo, han entrado en escena como un nuevo actor que aporta una serie de fortalezas a todo este proceso que venimos comentando. Son organizaciones de carácter privado que intervienen en lo público desde su propia autonomía, movidas por intereses solidarios y universales. El énfasis en su carácter de organizaciones no gubernamentales responde al deseo de afirmar su identidad frente al Estado y a los gobiernos como sociedad civil, es decir, como ciudadanía organizada desde la espontaneidad social que busca responder a los intereses colectivos.

En Venezuela, durante los últimos 20 años, hemos asistido al crecimiento vertiginoso de ONG y de redes de intercambio entre ellas. Su inmenso aporte al desarrollo social es fácilmente medible en la múltiples iniciativas desarrolladas. En esta última década han sido los aliados principales del Estado y las burocracias políticas en el desarrollo de las políticas sociales y de compensación. Gracias a ellas se han generado en muchos casos procesos reales de desarrollo social sustentable en comunidades de escasos recursos. Ellas también han servido de canal para que muchas personas puedan crecer en conciencia ciudadana, a través de su incorporación a este tipo de organizaciones.

Las organizaciones no gubernamentales intermediarias de desarrollo han jugado un papel especial en la vinculación entre Estado y sectores excluidos y marginados. Estas organizaciones han servido de canal de comunicación entre los recursos y políticas del Estado para el desarrollo social y los beneficiarios de los mismos. Aunque la historia de esta intermediación señale deficiencias y errores, el balance generalmente aceptado es altamente positivo para las organizaciones y para este modo de propiciar el desarrollo.

Dificultades del camino

Desde la afirmación de este balance positivo, es necesario destacar las dificultades en juego en el proceso de intermediación para el desarrollo que las organizaciones no gubernamentales han desempeñado.

Cabe señalar, en primer lugar, su marcada ambigüedad. Por una parte, las organizaciones no gubernamentales han terminado siendo no sólo socios del Estado y de los gobiernos, sino en buena parte el brazo ejecutor de las políticas y recursos económicos de aquellos. De allí que no es lo "no gubernamental" la definición que más les cuadre. El punto es complejo porque se trata de conjugar varios componentes difícilmente componibles. La corresponsabilidad entre sociedad civil y Estado exige alianzas entre ambos actores, guardando cada uno su propia identidad, para que sea alianza y no fusión, para que el resultado sea mucho más enriquecedor.

El reto es pasar de ser socios ejecutores a socios interlocutores y de socios complementarios a socios estratégicos. Definidos como socios para el desarrollo, tanto el Estado como las organizaciones no gubernamentales pueden entablar alianzas, en las cuales estas últimas ejecutan políticas y recursos desde una dinámica de interlocución que parte desde su experiencia, su propia capacidad instalada, el aporte expreso que se proponen hacer al desarrollo, desde su visión adquirida de la complejidad social. En otras palabras, desde lo más propio que les caracteriza como sociedad civil, que es la espontaneidad social. Si las ONG se convierten en correas de transmisión del Estado, los gobiernos dejan de hacer lo más importante que es el aporte de la creatividad. Esto es pasar de ser socios ejecutores a ser socios interlocutores. Pero esta complementareidad no basta, aunque es muy importante. El concurso de estas organizaciones forma parte de una estrategia para alcanzar el desarrollo sustentable; pues estas organizaciones, pueden dar un aporte específico a todo el conjunto de actores que intervienen en el proceso de desarrollo social, que se entiende conceptualmente desde determinadas características y en función de una prospectiva señalada.

Estos retos ponen en discusión el tema de la identidad, tanto de las organizaciones no gubernamentales como del



Estado. La identidad no se puede plantear como negación, sino como aquello que define en sí mismo y conecta con el entorno y sus actores. En este sentido, las organizaciones no gubernamentales intermediarias de desarrollo deben centrar su identidad en su carácter de intermediarios de desarrollo entre el Estado y sus gobiernos y los sectores beneficiarios y sus propias organizaciones de base. La pregunta es ¿qué es lo que se intermedia y cómo se intermedia entre unos y otros? El Estado y sus gobiernos y los sectores beneficiarios y sus organizaciones de base también deben entender la especificidad de las organizaciones de intermediación y coadyuvar a que ocupen su lugar; para ello, se requiere que estos actores posean la suya propia y estén dispuestos al diseño de un juego procedimental armónico en función del desarrollo sustentable. Este último punto es clave, porque la sustentabilidad del desarrollo depende en buena parte de cada actor interviniente ocupe debidamente su lugar y no solape a los otros. El Estado tiene una misión y un papel insustituible como rector de políticas públicas, las organizaciones de base popular son los interlocutores privilegiados de los procesos de desarrollo en medio del pueblo excluido, las organizaciones intermediarias pudieran ser los vehículos de comunicación entre Estado y organizaciones populares, aportando competentemente sus capacidades técnicas, administrativas, de gerencia, gestión, de interlocución, etc.

En esta coyuntura especial del gobierno y del Estado venezolano, las reflexiones anteriores tienen especial significado. Por una parte, no parece que la política social sea una prioridad, más allá del discurso y de los operativos. Pero lo más preocupante son las señales emitidas en el sentido de que el Estado no es sólo rector del desarrollo sino su exclusivo diseñador y ejecutor, especialmente en las áreas de política social, educación, salud, etc. Si estas señales se convierten en dirección de sentido, estamos ante el gravísimo peligro de perder la historia, de los últimos 20 años, de diversificación política en la sociedad venezolana.

Lo que venimos diciendo nos pone ante la principal dificultad del camino. Si las organizaciones intermediarias de desarrollo no se convierten en actores políticos con una visión de sociedad, en la cual el desarrollo social sustentable es

la prioridad del país que se pretende reconstruir y que esa prioridad requiere de una estrategia de concertación democrática de actores sociales fundada en la corresponsabilidad, estas organizaciones quedarán atrapadas en un juego sin salida frente al Estado y a los beneficiarios de su acción. El Estado y sus gobiernos seguirán sin entender y, lo que es peor, desconfiando y actuando en función de la capacidad de presión de las organizaciones. Las propias organizaciones desgastándose en la búsqueda de recursos y negociaciones con el Estado. Y los sectores beneficiarios y sus organizaciones de base enredadas en negociaciones directas con el Estado y sus burocracias, para lo cual no cuentan con los requerimientos necesarios.

Que las organizaciones no gubernamentales se entiendan como actores políticos, tiene una gran dosis de dificultad, porque requiere un esfuerzo previo de comprensión de lo que ha ocurrido en el país en estos últimos 20 años y con el proceso organizativo de la sociedad civil. Supone asumir la complejidad política, para la cual no se han preparado a lo largo de estos años. Supone trascender los caminos habituales por donde se ha transitado, para buscar nuevos rumbos que implican desinstalarse y perder las seguridades que dejan las rutinas.

JOSÉ VIRTUOSO
Jesuita, politólogo y Director del
Centro Gumilla

Las organizaciones no gubernamentales han terminado siendo no sólo socios del Estado y de los gobiernos, sino en buena parte el brazo ejecutor de las políticas y recursos económicos de aquellos.